pugna con los artículos 22 y 27 de la Constitución Nacional".

"El primero de los artículos mencionados prohíbe terminantemente "la prisión, detención o arresto por deuda u obligaciones puramente civiles" y los artículos del Código Judicial impugnados autorizan en casos específicos las detenciones por estos motivos. En cuanto al artículo 27, que garantiza el libre tránsito por el territorio nacional, sólo autoriza las limitaciones que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de inmigración. Pero dentro de estas limitaciones no quedan comprendidas las concernientes al arraigo o mandamiento de *ne exeat*".

DECISION: "Declara inexecutable los artículos 361 al 374 inclusive, del Código Judicial".

4/53 - Fallo de 27 de Febrero de 1953
(Gaceta Oficial No. 12.025 de 16 de Marzo de 1953)

ARTICULO 71

NOTA: Carmen L. de la Ossa de Pinto acusó de inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo No. 59 de 12 de Noviembre de 1952, y al Decreto Ejecutivo No. 135 de 31 de Octubre de 1952, expedidos por la Lotería Nacional, para que se les declarara violatorios del artículo 71 de la Constitución, por haberla destituido hallándose en estado de embarazo, y se la reintegrara al cargo, para que se declarara su nulidad y se ordenara el pago de indemnizaciones.

DOCTRINA: "En cuanto a la primera de las peticiones hechas por el demandante, procede declarar inexecutable los decretos aludidos, en cuanto destituyen a una mujer en estado de embarazo sin la indemnización de que habla el artículo 71 de la Carta Magna, pero no puede la Corte ordenar que se le restituya en el cargo porque después de las catorce semanas de protección constitucional el patrono puede despedirla legalmente".

"En lo relativo a la segunda petición, no procede acceder a ella porque el recurso es de inconstitucionalidad y no de nulidad, como lo intenta el peticionario".

"La tercera petición, ya se dijo, procede por cuanto declarados inexecutable los decretos demandados en lo que hace relación a la destitución de la demandante, se ordena el pago de las catorce semanas de sueldo con que la favorece la Ley fundamental".

DECISION: "Declara inexecutable los decretos aludidos en lo que se refiere a la destitución de la peticionaria, sin la indemnización correspondiente, y reconoce que a Carmen Luisa de la Ossa de Pinto se le adeudan las catorce semanas de que habla el artículo 71 de la Constitución".

5/53 - Fallo de 10 de Marzo de 1953
(G. O. de 28 de Marzo de 1953, No. 12.036)

ARTICULO 21

Ignacio Torres impugna el artículo 15 de la Ley 47 de 1946.

NOTA: El artículo 15 aludido establecía que sólo las personas que poseyeran, por lo menos diploma de bachiller, maestro o perito mercantil podían ocupar cargos administrativos en el Ministerio de Educación y sus dependencias. (Exceptuaba a los mecanógrafos, estenógrafos, porteros y empleados del servicio). El demandante alegaba que esta disposición impedía, por ejemplo, que técnicos graduados en la Escuela de Artes y Oficios pudieran ocupar en el Ministerio de Educación cargos administrativos vinculados a su especialidad. Aún cuando el demandante no invocó artículo específico de la Constitución, tanto el Procurador como la Corte consideraron que implícitamente se refería al artículo 21. El Procurador opinó, sin embargo, que tal artículo 21 no era incompatible con el impugnado "porque el artículo 15 de la Ley 47 de 1946 no exige, para que puedan ser ocupados cargos administrativos del Ministerio de Educación y sus dependencias, condiciones de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas". Pero la Corte fué de otro parecer.

DOCTRINA: "El Constituyente de 1946 consagra en el primer inciso de dicho artículo la igualdad de todos los panameños ante la Ley, a cuyo efecto prohíbe la existencia de fueros o privilegios personales, y a los extranjeros les garantiza la misma igualdad de jure, pero con las restricciones constitucionales de que dan cuenta el inciso segundo y el tercero, en los eventos allí contemplados, o sea que tal igualdad desaparece y los extranjeros quedan sujetos a regulaciones especiales por razones de salubridad, moralidad, seguridad pública, economía nacional, guerra exterior o por acuerdos que consten en tratados públicos".

"Se ve claro que lo que la Constitución de 1946 persigue

con el artículo 21, mencionado, es que las garantías ciudadanas que ella consagra no dejen de amparar a ningún ciudadano panameño, en igualdad de circunstancias y que éste no se vea privado del goce de ellas, tal como resulta en el caso del artículo 15 de la Ley 47 de 1946, a todas luces inconstitucional, puesto que le acuerda a un grupo de ciudadanos panameños, en una virtual situación de privilegio, un fuero especial, claramente inconsulto por no tener ninguna justificación de orden técnico".

"No cabe duda que es recomendable que la ley exija para desempeñar cargos administrativos en el Ministerio de Educación y sus dependencias una cultura general en las personas nombradas; pero así como los graduados de la Escuela de Artes y Oficios tienen una cultura general como la de los peritos mercantiles, es conveniente que se legisle en el sentido de incluir a dichos graduados entre las personas que pueden ser nombradas en cargos administrativos del Ministerio de Educación y sus dependencias".

DECISION: "Declara inexecutable el artículo 15 de la Ley 47 de 1946".

6/53 - Fallo de 10 de Marzo de 1953
(Gaceta Oficial No. 12.039 de 1o. de Abril de 1953)

ARTICULO 233
ARTICULO 20
ARTICULO 31
ARTICULO 32
ARTICULO 45
ARTICULO 48

NOTA: José A. Molino solicitó se declarara la inconstitucionalidad de los incisos 1º y 2º del Artículo 6º de la Ley 80 de 1934 (reformatoria del artículo 33 de la Ley 92 de 1925).

DOCTRINA: "La situación real que se plantea es la siguiente: La venta de bienes o derechos de un titular o una compañía, de la que forman parte sus herederos presuntivos, sea real o simulada tal venta, se considerará de todas maneras como donación y se le grava con el pago del impuesto respectivo".

"Es indudable que el legislador panameño se propuso un fin loable, al instituir ese tipo de impuestos fiscales, con los cuales pretende evitar la evasión del pago de los impuestos sobre mortuorias y donaciones..."

Pero el legislador panameño, al formular el precepto legal para evitar la evasión de tales impuestos, en armonía con los principios constitucionales que regulan la vida institucional del país, y que son garantía social de justicia, ha debido observar un mejor rigorismo técnico. Debió establecer claramente en los incisos 1º y 2º, como lo hizo en el inciso 3º, el mismo término de cinco años para que los primeros tuviesen aplicación, puesto que no hay razón ninguna para que ello no haya sido así. No hay base legal para que se entienda que los eventos contemplados en dichos dos primeros incisos, a diferencia del 3o., puedan, en puro rigor de justicia, causar el impuesto en cualquier tiempo. Su aplicación debe, pues, tener lugar, con sujeción al término de que habla el inciso 3o. y en igual evento".

"Pero, concretándonos a esta acción de inconstitucionalidad, tenemos que el texto constitucional de mayor entidad, para los efectos de este estudio, que se considera infringido, es el artículo 233 de la Constitución que establece que en Panamá no hay bienes que no sean de libre enajenación".

"El Procurador, en la Vista citada, alega que el legislador no ha querido establecer prohibición alguna de venta o traspaso de bienes en las condiciones previstas en esos artículos, sino tan sólo gravarlos con un impuesto determinado, y esto es así, evidentemente, pero hacia falta aclarar cuándo procede legalmente el cobro del impuesto en tales casos".

"No aparece acreditado, por lo mismo, que los incisos tachados de inconstitucionalidad se opongan o en alguna forma violen los artículos 20, 31 y 32 de la Constitución Nacional. Su vigencia resulta, por el contrario muy necesaria para la mejor defensa, de parte del Estado, de la eficacia de la tributación fiscal, indispensable para su propia subsistencia..."

"En cuanto a la cita de los textos 45 y 48 de la Constitución, esta Superioridad, de acuerdo con la Vista del Procurador General, considera que ni siquiera de modo remoto las disposiciones legales impugnadas se oponen a dichas normas constitucionales".

"Hechas las anteriores aclaraciones, se observa que no están justificadas las pretensiones del postulante Molino, sin perjuicio de que la correcta interpretación de la norma, de que da cuenta este fallo, deba servir para que las autoridades fiscales procedan en consecuencia, en la recaudación del impuesto de donaciones establecido en los incisos 1º, 2º y 3º del artículo 6º de la ley 80 de 1934. Conviene dejar esclarecido, sin embargo, que esta decisión no puede afectar re-